

## INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MICHELLI

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Este proyecto representa el triunfo de una corriente de pensamiento que debe interesarnos tanto como el texto legal.

Me refiero a la revalorización de las pequeñas y medianas empresas como factor esencial del desarrollo económico.

Durante muchos años la tecnocracia pretendió convencernos de las ventajas de privilegiar lo macro, la concentración, los gigantes económicos. Parecía que lo grande en el sector productivo fuera bueno en sí mismo.

Se aplicó indiscriminadamente un concepto (el de economías de escala) a pesar de que su significación estadística varía mucho según la actividad.

Según este criterio, llenar la economía de megaempresas, concentrar, magnificar, equivaldría por sí solo a reducir costos y mejorar la rentabilidad.

Así fue como se discriminó en contra de las empresas menores, sobre todo en materia crediticia. Y esto ocurrió en todas las actividades.

En el sector financiero, los expertos del Banco Central, en 1976, se habían olvidado del cuello de botella que se formó en los años 60 en la industria liviana,

cuando los bancos no daban un solo peso para financiar la colocación de sus productos. Tuvieron que aparecer espontáneamente, anárquicamente, cantidad de pequeñas financiadoras que llenaron ese vacío, no siempre de la mejor manera, las que años después fueron cerradas en cantidad, de un solo plumazo.

Esta ha sido la mentalidad. Las pequeñas empresas, como algunos han vuelto a llamarlas despreciativamente, eran quíscos.

Yo quisiera que me contestaran: ¿era quíscos el Banco de Intercambio Regional, primero en el ranking de bancos privados, que inició el derrumbe financiero de los años 80? ¿Era quíscos el Banco de Italia? ¿Era quíscos el Banco Alas, que se jactaba de haber incorporado la tecnología más moderna? El Banco del Interior y Buenos Aires, el Español, el de Avellaneda, ¿también eran quíscos?

Valorar las empresas tomando en cuenta solamente la dimensión significa desconocer la importancia de los factores cualitativos: la calidad de la organización, la capacidad de gestión, la honestidad empresarial, la capacitación y el rendimiento laboral. No hay nada en esos aspectos que autorice a conceder superioridad a una empresa sólo por ser grande. Por el contrario, en algunos aspectos la dimensión pequeña o mediana suele ser una ventaja, como lo evidencia su mayor ca-

pacidad de adaptación a las situaciones cambiantes, o al menos a algunas de ellas.

Muy distinta a esta actitud de menosprecio fue la que adoptaron los grandes países cuando debieron emerger de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial.

Para conseguir que la economía italiana, la japonesa, y ahora la de los llamados tigres asiáticos se transformaran en economías exportadoras, altamente competitivas, no pensaron en cerrar sus empresas menores. Sabían que justamente en ellas se concentraba lo mejor de la capacidad artesanal de esos pueblos, sus virtudes laborales, su responsabilidad y capacidad de producción, cualidades que muy a menudo en la gran empresa se pierden o prostituyen. Y gracias a esas cualidades, ingenuidades para aprovecharlas y para superar sus limitaciones (como el desconocimiento de los mercados mundiales), creando sociedades de exportación o mediante programas especiales de asistencia, fue como se convirtieron en formidables factores del desarrollo.

Esta ha sido la solución, difícil pero la única eficiente y duradera. La solución fácil —que en definitiva no es solución— consiste en marginar estas empresas, librarlas a su suerte, provocar su desaparición, y alentar a los grandes inversores que vendrán para suplir nuestras supuestas incapacidades.

Detrás de estas políticas no hay solamente ignorancia de lo que es una empresa o poderosos intereses en juego. También hay un error de óptica. Se observa, (y se lo ha dicho a cada momento) el fenómeno de globalización mundial de la economía, la expansión de empresas a nivel internacional, la absorción y fusión de muchas de las más poderosas. Pero se ignora, o no se quiere ver, que estos fenómenos van acompañados de otras de signo opuesto, que impulsan a la descentralización y a la desconcentración y representan una reafirmación de los valores individuales, locales o regionales. No hace falta leer a Alvin Toffler en *La Tercera Ola* para entenderse. La aparición de fabulosas computadoras de bolsillo, que interrumpen el crecimiento cada vez mayor de las computadoras, es un poco el símbolo de este cambio. Vale decir, que son las sociedades modernas, es el mismo progreso tecnológico, el de los medios de comunicación y de transporte que permiten descentralizar las tareas y la producción lo que impulsa a recorrer simultáneamente estos dos caminos opuestos: hacia lo grande en unos casos, hacia lo pequeño y descentralizado en otros.

Es en este contexto histórico, señor presidente, en el que se ha manifestado ya hace años la revalorización de las pequeñas y medianas empresas. Pero los argentinos no nos dábamos por enterados. Para nosotros eran (y para algunos siguen siéndolos) quioscos.

Por todo ello considero plausible la aparición de este proyecto que reconoce la importancia de las PYMES como motor de un crecimiento que se viene demorando en exceso. Y es destacable también que el proyecto apunte a un problema básico de las pequeñas empresas como es el acceso al financiamiento bancario.

Para las principales entidades financieras las PYMES son, en cierto sentido, una clientela marginal, o por lo menos de interés secundario. Su dimensión en estos casos constituye una desventaja: por un lado tienen escaso peso individual como inversores y, por el otro, represen-

tan un considerable fraccionamiento de la demanda crediticia, con el efecto de un costo administrativo promedio superior al que origina la asistencia a grandes empresas. Es indudable que también es mayor el fraccionamiento del riesgo (elemento decisivo en la banca) y que en una economía próspera y con un empresariado eficiente representan una clientela de enorme interés, pero la realidad comprobada es el desplazamiento en favor de las grandes empresas. Las PYMES son un negocio de escaso interés.

Uno de los motivos o pretextos más invocados para esta descalificación son las garantías.

Cuando el sector atraviesa momentos difíciles (con una elevada tasa de morosidad o de iliquidez) o cuando los banqueros no están dispuestos a bancar más que lo aparentemente seguro y conocido, sea cual fuere la calidad de la gestión y de los proyectos de inversión del demandante de crédito, es muy difícil que las pequeñas empresas ofrezcan garantías satisfactorias a juicio de las entidades financieras.

El problema que entonces se les plantea es doble: no sólo se les priva de financiación sino que, en caso de obtenerla, es de elevado costo, lo que incide en sus propios costos de producción y precios de venta.

Por supuesto no es un problema exclusivo de nuestro país. Los países desarrollados lo sufrieron igual que nosotros.

Pero lo encararon hace tiempo creando instituciones estatales, mixtas o privadas, que no sólo apoyan la financiación sino contribuyen al desarrollo de la empresa, prestandole asesoramiento técnico y financiero.

Los japoneses desde los años 30 vienen desarrollando una activa política de apoyo a las PYMES. En 1936 fundaron el Banco de Cooperativas Comerciales e Industriales, y en 1937 la Asociación de Garantías de Crédito de Tokio. ¿Cuál fue la preocupación declarada de las autoridades? Que los empresarios más pequeños no sufrieran por su escasa capacidad para competir con empresas más grandes e incorporar la mejor tecnología. Pero ésta no es historia pasada, porque los japoneses, que no son muy ortodoxos, mantuvieron después de la guerra, pese a la adopción de políticas liberales, dos bancos oficiales: el Financiero de la Pequeña Empresa y la Corporación Financiera Nacional, además de sancionar la Ley sobre Seguro de Crédito a la Pequeña Empresa por la cual el gobierno interviene activamente en el otorgamiento de garantías crediticias.

Podría extenderme citando experiencias parecidas en otros países. En Italia, por ejemplo, han funcionado con éxito el Ente Nacional para el Artesano y la Pequeña Industria y el Ente Nacional de Productividad.

En Suecia un Fondo de Crédito a la Pequeña Industria.

En Noruega cuentan con la Oficina Nacional para la Promoción a la Exportación, que asiste únicamente a las empresas pequeñas y medianas que producen para exportar.

Quiero decir que la preocupación que llevó a elaborar este proyecto no es nada novedosa. Tiende a satisfacer una necesidad reconocida en todas partes,

Pero el proyecto ha salido recoger otro aspecto de la experiencia internacional, aparte del crediticio.

Se trata del reconocimiento de las desventajas en que se encuentran las pequeñas empresas para acceder a las modernas tecnologías y para trascender a otros mercados. Estos dos problemas podrían ser secundarios una década atrás. Hoy son fundamentales. Es tan grande la vinculación que existe, en el proceso de producción y comercialización de un país entre las empresas de diversos sectores, grandes o pequeñas, que las deficiencias en algún eslabón deterioran el sistema, descolocándonos competitivamente. Esto es lo que tardaron en ver los tecnócratas que sólo tuvieron ojos para los problemas de las grandes empresas.

La misma ceguera se ha tenido en advertir la importancia que este sector puede y debe tener como proveedor de divisas:

Es obvio que las dificultades que encuentran en este campo son muy grandes, pero también es cierto que son dificultades superables, como lo demostraron otros países al crear sociedades que complementan a las PYMES en la investigación de mercados y en efectivizar los negocios de exportación.

En todos estos aspectos encuentran alguna referencia en el proyecto:

— Se establecen bonificaciones a las tasas de interés.

— Se prevé la creación de un Fondo de Garantía y el fortalecimiento de organismos y programas ya existentes, como los centros de información PYMES, el INTA, el INTI y varios más.

— Se prevé la promoción de consorcios de empresas PYMES, de políticas de apoyo a su internacionalización comercial, de un programa nacional de capacitación, de un sistema único integrado de información y asesoramiento.

— Se prevé asimismo la instrumentación de líneas especiales de financiación y la modificación de procedimientos administrativos que implicarán reducciones de tiempo y costos de gestión.

Todo esto exigirá una labor intensa de parte del Ministerio de Economía. Pero es absolutamente indispensable para que esta ley no termine en el cajón de las buenas intenciones.

Nos queda por referirnos al último título del proyecto, sobre "Relaciones de trabajo". Ha sido indudablemente el más criticado. Se habló de desprotección social. Yo me pregunto si hay una desprotección mayor que la

falta de desarrollo, con sus secuelas de desempleo, sean cuales fueren las ventajas sociales escritas en las leyes. En un contexto crítico de la economía está probado que, tratándose de pequeñas empresas, la legislación social demasiado generosa es contraproducente. Con frecuencia es burlada porque las condiciones en que se opera impiden su cumplimiento. Y éstas no son conjeturas. Muchas pequeñas empresas han desaparecido como consecuencia de reclamos indemnizatorios o de normas laborales o impositivas que van a contramano de la realidad económica.

Pero adecuar la legislación no significa destruirla. Y en este sentido debemos destacar dos aspectos del proyecto que se han tergiversado:

En primer lugar, a los fines de la aplicación de estas normas se incluye una definición de pequeña empresa (no ya mediana sino pequeña) que le pone un límite de 40 trabajadores. De esta manera se impide que por vía reglamentaria del Ejecutivo caigan bajo estas disposiciones empresas de mayor dimensión, burlándose el espíritu de la ley.

En segundo lugar, el texto modifica o deja al arbitrio de las empresas la aplicación de algunas disposiciones que facilitarán la actividad y no tienen relación con los beneficios laborales, como los que se refieren al Registro Único de Personal. Pero en todos los demás casos (salvo en el preaviso) las posibles modificaciones quedarán a cargo de la parte empresaria y sindical. Lo que no seguirá ocurriendo, y en eso estoy de acuerdo, es equiparar a través de convenios generales la realidad de un establecimiento de 10 personas con empresas de cientos o miles de trabajadores.

Esta equiparación es ficticia, y sólo favorece a los trabajadores en la letra muerta de la ley.

He señalado que este proyecto tiene el mérito de contemplar una realidad largamente desatendida. Pero también destaqué la enorme importancia que tendrá la acción del Ministerio de Economía para que la ley se traduzca en hechos beneficiosos para un sector mayoritario de empresarios y trabajadores.

Por eso, si el texto fuera aprobado, como espero, bien podríamos decir: los legisladores cumplimos. Cumpla ahora el Ejecutivo. Y sería altamente satisfactorio que dentro de un año, pudiéramos felicitar al señor ministro, que tantas veces se muestra quejoso por la actuación parlamentaria, por los volúmenes de crédito otorgados a las PYMES a través del Banco Nación y del BICE, y por varias otras provisiones de esta ley convertidas en realidad.

Porque si la votamos, no es para que se cumpla solamente el título III.

2

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GAZIA

**Observación al dictamen de mayoría en el proyecto de ley sobre régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)**

Vengo en tiempo y forma a elevar los fundamentos de mi disidencia al proyecto de ley enviado por el Poder

Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación por el que se estructura un régimen especial de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, por considerarlo discriminatorio en forma negativa para los trabajadores de pequeñas empresas respecto de los de medianas y grandes empresas.

En efecto, el artículo 88, inciso c), establece que no regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo, cuando las pequeñas empresas hagan uso de las modalidades de contratación promovidas previstas en los artículos 43 al 65 de la Ley Nacional de Empleo. En consecuencia, en estos supuestos los trabajadores de las pequeñas empresas sufrirán una discriminación negativa respecto de los demás trabajadores.

Asimismo, el artículo 94 establece que el preaviso en las pequeñas empresas se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito y tendrá una duración de un mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador. En consecuencia, estos trabajadores pierden respecto del resto de los trabajadores dos derechos: el de la integración del mes de despido (artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo) y el derecho de un preaviso de dos meses en función de la antigüedad en la empresa superior a cinco años (artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo).

También este mismo artículo 94 del proyecto genera otra discriminación al disponer que regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la ley, con lo que unos serán los derechos de los trabajadores de empresas grandes y medianas, otros los derechos de los trabajadores de empresas pequeñas y, dentro de esta categoría, serán distintos los derechos de los trabajadores según si fueron contratados antes o después de la vigencia de esta ley.

Para cumplir con el objetivo de privilegiar y promover a las PYMES, sin alterar los derechos de los traba-

jadores, otros países han construido Fondos de Garantía Salarial, con aportes de todos los empleadores, mediante los cuales todos los trabajadores tienen los mismos derechos, y dichos fondos completan las menores obligaciones de las PYMES respecto de las grandes empresas.

Un aspecto de este sistema parece introducirse en el artículo 97 del proyecto cuando establece: "Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento de crisis, el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir total o parcialmente las indemnizaciones respectivas, o financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos". En mi opinión, el Fondo Nacional de Empleo debería cubrir el apoyo que el proyecto de ley que nos ocupa otorga a las pequeñas empresas en materia de relaciones de trabajo, considerando altamente discriminatorio que la promoción y ayuda de las pequeñas empresas recaiga sobre el recorte de los derechos de los trabajadores de las propias pequeñas empresas.

En virtud de lo expuesto, propongo las siguientes modificaciones a los artículos comentados:

El artículo 88, inciso c), quedará redactado de la siguiente manera: "El Fondo Nacional de Empleo tomará a su cargo la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo".

Se agregará el siguiente tercer párrafo al artículo 94: "El Fondo Nacional de Empleo tomará a su cargo los mayores beneficios que les corresponde a los trabajadores afectados en virtud de lo dispuesto en los artículos 231 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo".

3

### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA FERRINI

**Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)**

*Primero, los desocupados*

1. Dicen que cuando los poetas escriben, aunque sus versos sean abstractos o no se refieran a otros seres humanos, siempre van dirigidos a alguien.

Algo parecido nos pasa a los legisladores. Cada vez que uno redacta o discute su posición frente a un proyecto de ley, no piensa en el bien común en general sino en grupos o personas concretas que se beneficiarían o perjudicarían con esa iniciativa. Construir el bien común es dar armonía a las relaciones entre personas de carne y hueso, que tienen valores altruistas pero también deseos egoístas, que tienen algunos intereses comunes pero también otros conflictivos.

La legislación del trabajo surgió para resolver algunos de esos problemas: los que nacen de las desigualdades económicas que, en la realidad, existen entre empleadores y empleados, y que se traducen en ventajas en favor de quien contrata el trabajo (el empresario). Dichas disparidades, si no se corrigen de algún modo, conducen a que los empleadores impongan a sus dependientes condiciones de trabajo indignas.

Así, el derecho laboral obliga a las partes que realizan un contrato de trabajo a respetar ciertas pautas mínimas de protección para el más débil —el emplea-

do—, de modo tal que las condiciones que se acuerden sean iguales o mejores que las fijadas por la ley, pero no peores.

Estas normas —junto a otras políticas, económicas, sociales y educativas— ayudaron a que la Argentina fuera, durante cierto período de su historia, una tierra con justicia social.

2. Sin embargo, no es lo mismo la justicia social en los años cuarenta que en los noventa.

Cuando la economía generaba con facilidad abundantes puestos de trabajo, cuando era verdad que en la Argentina no trabajaba solamente el que no quería, la justicia social consistía en asegurar que el empleado fuera bien remunerado, tuviera seguridad social suficiente, gozara de cierta estabilidad en su empleo, etcétera. Porque había trabajo para todos, la función del Estado era garantizar que ese trabajo fuera digno y estable.

Hoy, en cambio, las modificaciones en la realidad política y económica argentina y mundial —la alta tecnología, el nuevo modelo de empresa, la competencia externa, el ajuste de las cuentas del Estado, la incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado— han creado un escenario nuevo, con una característica saliente: la desocupación.

No trabaja el que quiere sino el que puede: el que conoce las nuevas herramientas, el que sabe trabajar en los sectores económicos que crecen, el que ha acci-

bido capacitación, el que tiene cierta edad —se prefiere que no sean ni demasiado jóvenes ni de más de cuarenta años— o sexo —es más difícil conseguir empleo para la mujer que para el varón—. La desocupación no es un problema sólo de quienes no consiguen trabajo; también de los muchos que temen perder el suyo y no volver a encontrar otro.

En este campo, la función de la política está ahora un paso atrás de la del tiempo de Perón: hoy no se trata tanto de proteger a quienes trabajan como de crear empleo para quienes no lo tienen. El legislador que quiere actuar para el bien común debe ponerse una consigna: primero, los desocupados.

3. El presidente Menem acaba de enviar al Congreso un conjunto de proyectos de leyes que apuntan a frenar la desocupación y a fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Se trata de iniciativas que apuntan a superar algunas trabas legales que hoy hacen que el empleador que necesita más trabajadores o bien los tome "en negro", o directamente prefiera pagar horas extras hasta la fatiga total de sus actuales empleados. En esta dirección van algunas de las propuestas: la incorporación del periodo de prueba —tras el cual, en caso de no haber rendido suficientemente, puede prescindirse del trabajador sin indemnización—; el contrato de trabajo a tiempo parcial —que posibilita ser empleado "en blanco" para trabajos de reducida carga horaria—; la modificación de la legislación sobre accidentes de trabajo mantiene la protección del obrero, pero hace más previsible el cálculo del costo económico para el empresario.

Dos sectores hoy especialmente afectados por la falta de trabajo también se verán beneficiados. Por un lado, los jóvenes o los que provienen de actividades económicas en crisis, a través del contrato de aprendizaje. Por el otro, los mayores de cuarenta años —que según un estudio reciente de Adolfo Canitrot constituyen el grupo crítico del desempleo—, los discapacitados y otros sectores con especiales dificultades físicas o sociales, mediante el denominado "contrato de trabajo especial de fomento del empleo".

Un párrafo especial merece el proyecto de conciliación laboral obligatoria al que se deberá recurrir con carácter previo a la demanda judicial para dirimir conflictos laborales.

El objetivo de esta iniciativa es permitir que el trabajador acceda a una justicia laboral rápida. Es menester recordar que una justicia tardía no es justicia y, en nuestro país un juicio laboral no dura menos

de tres años como promedio, fundamentalmente por la enorme cantidad de conflictos que llegan a los estrados judiciales. Esto equivale a condenar al trabajador cuyos derechos han sido violados a vivir en una situación de indefensión e incertidumbre. En este sentido, el servicio de conciliación obligatoria —donde se pueden resolver asuntos individuales o colectivos—, al reducir la cantidad de conflictos que llegan a los tribunales, facilita la vigencia de una justicia laboral más equitativa.

4. Finalmente, una consideración particular debe hacerse respecto de dos definiciones políticas muy trascendentes de nuestro gobierno que quedan visibles a través de estos proyectos.

Una es la del tratamiento privilegiado que se le da a la pequeña y mediana empresa, que es la que más empleo genera dentro de la economía nacional, que refleja el esfuerzo de una gran cantidad de productores y emprendedores muchas veces afectados por la dura competencia de productos importados o por las dificultades financieras y/o de mercado que se le suscitan a causa de la actual transformación económica.

La otra es que todas las modificaciones que promueven estas iniciativas respetan el marco del convenio colectivo de trabajo, por lo que no pretenden disolver sino modernizar las relaciones entre la empresa y el sindicato, por donde sigue pasando la mayor responsabilidad en la protección del trabajador.

Toda esta nueva normativa, entonces, apunta a lo mismo. Más puestos de trabajo, más crecimiento con estabilidad de la economía. En momentos muy difíciles —sobre todo a partir de la crisis de México— resulta indispensable dar respuestas maduras y profundas a problemas que, si no los resolvemos desde la política con un sentido de bien común, tarde o temprano lo va a resolver el poder económico en función de su interés y valiéndose de la desesperación de los desocupados.

Al apoyar estos proyectos de ley tengo la convicción de que estoy ayudando a construir la justicia social en la forma que este tiempo nos reclama: proteger al ocupado sin desentenderse del desocupado, promover más puestos de trabajo en condiciones laborales razonablemente dignas.

Mi deber como representante del pueblo, mi intención más íntima al votar cada proyecto de ley, sigue siendo la protección y promoción de los más débiles. Ellos son, en la realidad actual los desocupados, los subempleados, los que tienen empleos precarios.

Y pienso que, en la Argentina actual, los únicos privilegiados deben ser los que quieren trabajar,

4

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SALINO

**Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)**

El proyecto de ley que estamos tratando, sobre el establecimiento de un régimen especial para las PYMES,

está orientado a la promoción de un segmento de empresas que tiene una participación importante en la estructura productiva y ocupacional de nuestro país.

La promoción de la micro, pequeña y mediana empresa no es un tema nuevo, la Comunidad Europea

está llevando a cabo programas y acciones en este sentido desde hace más de 20 años.

Y en nuestro país se ha reconocido la importancia de las PYMES para el desarrollo económico, y el impacto positivo que pueden generar en el empleo por tratarse de unidades productivas con mano de obra intensiva.

Las PYMES por sus características, su tamaño, su dinamismo y apertura a la innovación son capaces de adaptarse con facilidad a las nuevas condiciones de los mercados.

Pero, a pesar de contribuir significativamente al producto bruto interno y ocupar más del 60 % de la mano de obra del país, sufren desventajas competitivas por la escala reducida de su producción.

La necesidad de su promoción se basa en el hecho de que las mismas características que las hacen flexibles y de fácil adaptación a los cambios en las demandas, les dificultan su acceso al crédito y su capacidad de producir en cantidad y calidad adecuadas a los estándares internacionales.

La oportunidad que brinda el Mercosur, con la ampliación del mercado regional, crea la necesidad de elevar la calidad de los productos y servicios para competir en forma eficiente.

Por esta razón, es de importancia fundamental, no solamente facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito (a través de las Sociedades de Garantía Recíproca), sino también brindarles apoyo a través de la capacitación y la asistencia técnica.

Este es un punto del proyecto que estamos tratando que yo quiero destacar. Porque la experiencia internacional ha demostrado que la capacitación y la asistencia técnica, así como la información son claves para el desarrollo de las PYMES.

La capacidad gerencial de los cuadros directivos y la formación profesional de los trabajadores, así como el conocimiento de la demanda son fundamentales para lograr pequeñas y medianas empresas eficientes, en un mercado que exige permanentemente mayor calidad.

Además, el régimen especial para las PYMES debe servir, no solamente para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas existentes, sino también para estimular la creación de nuevas empresas. En este sentido la capacitación no es sólo capacitación técnica, también debe estar orientada a desarrollar "espíritu de empresa".

El "espíritu de empresa" no es un talento innato, no se nace "con pasta de empresario", es una actitud

que se promueve, se estimula y desarrolla a través de cursos de formación y capacitación especialmente orientados a ese fin.

En el año 1990, como secretaria de la Muejr de al provincia de San Luis, tuve la oportunidad de participar en Italia en un curso organizado por la OIT, sobre "Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa de las mujeres". El mismo estaba dirigido a la discusión de políticas para promover la pequeña y mediana empresa y la capacitación de las mujeres para esta salida laboral.

En el desarrollo de estos cursos, además de discutir la importancia de la planificación, los problemas de acceso al crédito y los estudios de mercado, la OIT pone especial énfasis en el debate sobre la necesidad de desarrollar actitudes de autonomía, responsabilidad, flexibilidad frente a los cambios y la capacidad de asumir riesgos y tomar decisiones, en la capacitación de los pequeños empresarios.

Por la importancia que tienen la formación y capacitación en la promoción de las PYMES, quiero destacar especialmente, entre los artículos del proyecto de ley que estamos tratando, los referidos al Sistema Único Integrado de Información y Asesoramiento (artículo 12 y subsiguientes), al Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresariales y gerenciales (artículo 22) y la sección VII que se refiere a la capacitación profesional de los trabajadores.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son una oportunidad para la reconversión laboral y, en particular las micro y pequeñas empresas se han transformado en una salida laboral importante para muchas mujeres y jóvenes que son grupos particularmente afectados por los problemas del empleo.

Asimismo las PYMES son unidades productivas de vital importancia para la dinamización de las economías regionales, en la medida que aumenten su competitividad y en consecuencia sus posibilidades de inserción en el mercado internacional.

El proyecto que estamos considerando tiende a brindarles un apoyo eficiente a través de medidas que les permitan disminuir el riesgo y elevar su nivel de productividad y competitividad, constituyendo los programas de asesoramiento, capacitación y asistencia técnica elementos claves en este sentido.

Adelanto mi voto favorable a este proyecto que tiende a generar condiciones de viabilidad, desarrollo y rentabilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas.